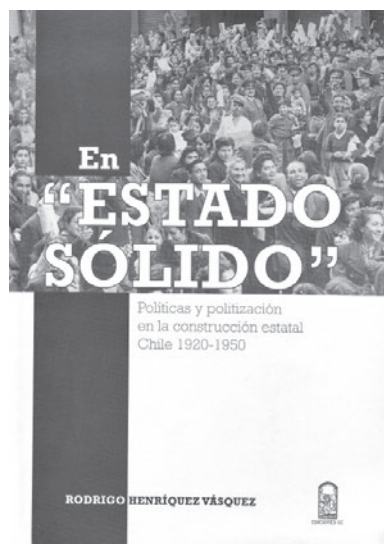


Rodrigo Henríquez, *EN 'ESTADO SÓLIDO'. POLÍTICAS Y POLITIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL. CHILE, 1920-1950.*

Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2014, 280 páginas.

Juan Carlos Yáñez Andrade*

Son pocas las investigaciones que han abordado la constitución de una sociedad de masas y la promoción de las políticas de consumo durante el siglo XX en Chile¹. El libro que reseñamos, abocado a estudiar el proceso de expansión del Estado, en especial en la esfera del consumo, ayuda a llenar este vacío. De esta forma, aunque se inserta en la renovación historiográfica de los últimos años acerca del Estado Social y el surgimiento de las políticas sociales², su novedad radica en que el eje de la demanda social se sitúa en la problemática de la alimentación de los trabajadores. Además, el hecho de que haga visible una



primera institucionalidad de control de precios desarrollada en el país desde los años 1930, que contradicen los discursos neoliberales actualmente en boga, merece que las Ediciones Universidad Católica reciban un reconocimiento por publicar la tesis de un joven historiador.

Para Henríquez el proceso fundamental, y que ayuda a articular una nueva forma de relación entre el entramado social, lo político y las demandas sociales, sería la consolidación del Estado a partir de comienzos de los años 1930, como respuesta a los descalabros que produjo la Gran Depresión. Esta expansión se

* Doctor en Historia (EHESS). Investigador Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. E-mail: yanezandrade@gmail.com

1 Un libro reciente que aborda lo que el autor llama la 'norteamericanización' de la sociedad chilena, es el de Stefan Rinke, *Encuentros con el Yanqui: Norteamericanización y cambio sociocultural en Chile, 1890-1990* (Santiago: Dibam, 2013).

2 María Angélica Illanes, *Cuerpo y sangre de la política: la construcción histórica de las visitadoras sociales. Chile, 1887-1940* (Santiago: Lom Ediciones, 2006); Oscar Mac-Clure, *En los orígenes de las políticas sociales en Chile, 1850-1879* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012); Macarena Ponce de León, *Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890* (Santiago: Dibam, 2011).

habría producido en torno a tres áreas diferenciadas: en la regulación del mercado laboral, la intervención económica y el fomento a la industrialización. Según el autor, el Frente Popular chileno reordenó las relaciones entre el Estado y la economía (y sus grupos de interés, los empresarios) permitiendo, por una parte, grados crecientes de autonomía en el primero y creando, por otra, nuevos espacios de intervención en la segunda. La clave estatal le permite al autor centrar sus postulados teóricos y conceptuales en la politización de las demandas sociales lograda por el Frente Popular, tanto en su periodo de constitución (1936) como cuando accedió al poder (1938), demandas que permitieron hacer visible a los sectores populares, generar condiciones para la movilización de masas y posibilitar, aunque fuese simbólicamente, el acceso del pueblo a los niveles de decisión política. En el periodo de crisis económica que afectó a Chile, con las consecuencias recesivas conocidas (la caída de todos los indicadores de producción y aumento de la cesantía), el elemento aglutinador de las demandas sociales, y que de paso unificó la política social del Frente Popular, fue la lucha por la disminución del costo de la vida y el acceso a las subsistencias.

Esto es, a grandes rasgos, la propuesta de Rodrigo Henríquez. El plan de la obra responde bien a los objetivos de la investigación y los cruces temáticos anteriormente señalados. Se organiza en seis capítulos que avanzan desde los modelos europeos de frentes populares (francés y español) y sus relaciones con Chile, hasta el estudio del Comisariato General de Subsistencia y Precios (CGSP), creado en 1932 y responsable de la políti-

ca de control de precios, pasando por la caracterización de los actores políticos del Frente Popular (socialista y comunistas), los rasgos definitorios del Estado Social en América Latina y Chile, y las demandas ciudadanas en torno al alza de precios de los artículos de primera necesidad.

Sin embargo, nos parece que este plan se ve limitado por dos aspectos claves. Primero, la sobredimensión que tiene el estudio del Frente Popular, el que comprende alrededor de 160 páginas del libro, descuidando los ámbitos centrales y más novedosos de la investigación, como es la constitución de una demanda social en torno al acceso a los alimentos y la protección estatal del consumo, los cuales son analizados en los dos últimos capítulos, en tan solo 80 páginas. El segundo, es la falta de referencias a las variadas fuentes que registraron debates, apreciaciones críticas o representaciones sobre la alimentación y el estado nutricional de la población de escasos recursos, y que nos parece que jugaron un papel fundamental en hacer visible el problema del costo de la vida y los problemas de inequidad alimentaria. Estudios nutricionales, fuentes ministeriales, revistas médicas, entre otros, ni siquiera son evocados en la investigación y que resultan claves en la constitución de una política pública en torno a la alimentación popular. Además, estos discursos ayudan a entender cómo funcionan las relaciones entre los médicos interesados en profesionalizar su propio ejercicio científico de la alimentación (la nutrición) y la esfera pública (ministerios y parlamento) responsable de ejecutar las primeras medidas en torno al problema. La vinculación temprana que los médicos establecieron con el poder político y el perfil público

que muchos de ellos tuvieron³, ayuda a entender la institucionalización de una política alimentaria en torno al Consejo Nacional de Alimentación (1937), bajo la dirección del médico Jorge Mardones y con el apoyo de Eduardo Cruz-Coke, Ministro de Salud del gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938).

Por el contrario, el autor se concentra en la esfera económica y el modelo keynesiano que comenzaría a estar presente en la intelectualidad latinoamericana, donde el Estado actúa como resorte estratégico en la inversión público-privada y de conductor de la conflictividad social. Que la política de promoción del consumo haya sido un aspecto central en la reactivación de la economía bajo los principios de la sustitución de importaciones, es algo que muchos historiadores han constatado en diferentes fases del capitalismo⁴. Sin embargo, esto no es suficiente para comprender en toda su complejidad la constitución de una política de alimentación popular.

Esta falta de equilibrio en la organización de los capítulos no sería negativa si se complementara con un estudio más profundo de los temas que ayudan a validar sus hipótesis de trabajo y una presentación de fuentes de archivo más variadas. El problema es que el Frente Popular aparece en la investigación como un actor omnipresente, tanto así que queda la sensación en largos pasajes del libro que estamos ante

una historia política del Frente Popular más que un estudio sobre la expansión de las competencias del Estado en la esfera del consumo. Creemos que el problema de la periodificación del Frente Popular es un nudo que jamás se desata y que atenta en la relación de los ejes narrativos de la investigación, como son la politización de las demandas sociales que ofrece la apertura del régimen político presidencial nacido con la Constitución de 1925 y la intervención en materia económica para fijar los precios que se produce a partir de 1932 con la creación del CGSP. Por ejemplo, en el libro se entiende que la política *frente populista* se inicia en 1936, aunque el acceso al poder solo se logra en 1938. Algunos autores limitan la existencia del Frente Popular al periodo de 1938 y 1941, pero Henríquez extiende su existencia hasta 1948. Sin embargo, el marco institucional que permite el control de precios y las políticas pro consumo proviene de 1932, cuando se crea el CGSP, es decir seis años antes del ascenso al poder del Frente Popular. Claramente estamos frente a una apuesta metodológica que obliga al autor a hacer coincidir el Frente Popular con el CGSP, para así demostrar que la alianza de partidos que accede al poder en 1938 implicó una experiencia *inédita y excluyente* de relacionar los dispositivos con los cuales opera el Estado de Bienestar en construcción y las demandas por el abaratamiento de los alimentos y el

3 Ver, por ejemplo, el estudio introductorio de María Soledad Zárate, "Alimentación y previsión biológica: la política médico-asistencial de Eduardo Cruz-Coke" en Eduardo Cruz-Coke, *Medicina preventiva y medicina dirigida* (Santiago: Cámara Chilena de la Construcción, PUC, Biblioteca Nacional, 2012); Carlos Huneeus y María Paz Lanús, "Ciencia política e historia: Eduardo Cruz-Coke y el Estado de Bienestar en Chile, 1937-1938", en *Historia*, 35 (Santiago 2002).

4 Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996); Néstor García Canclini, *Consumers and Citizens: Globalization and Multicultural Conflicts*, trans. and with introduction by George Yúdice (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001); Victoria de Grazia, *Irresistible Empire: America's Advance Through Twentieth-Century Europe* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2005).

acceso a las subsistencias que hace una ciudadanía empoderada.

Concordamos con Henríquez en la importancia que tuvo el CGSP y su valor tanto simbólico como práctico en la definición de una política de intervención en la economía, por algo su existencia se prolongó hasta comienzo de los años 1970 cuando fue clausurado por la dictadura del general Augusto Pinochet en el marco de la aplicación de la libertad de precios. Sin embargo, el CGSP presentó las ambigüedades propias del periodo de constitución de las políticas de bienestar del Estado chileno, como fue su interés en incentivar el consumo en sectores productivos claves, como la construcción, en desmedro del control de precios de productos agrícolas y ganaderos.

El que la política pro consumo de los distintos gobiernos se centrara en el control de precios, a contracorriente de las sugerencias que hacían numerosas agencias internacionales como la OIT y diversos científicos sociales (Moisés Poblete y Jorge Ahumada), tenía que ver con los marcos ideológicos transversales que operaban en el continente americano, que hacía que gobiernos en apariencia de naturaleza tan diversa apelaran a las mismas políticas de intervención, independiente de las particularidades de sus problemas de subsistencia. En el caso de Chile, los arreglos políticos que ligaban al Estado con los grupos de presión eran más fuertes que la implementación de cambios estructurales que transformarían, por ejemplo, las condiciones de producción del agro o reorientarían los incentivos hacia el aumento de la producción y la competencia empresarial. Por cierto que el problema no

radicaba en las competencias y facultades de que disponía el CGSP, sino en los problemas estructurales que fue acarreado la economía chilena y que presionó el alza sostenida de salarios y precios.

Por último, el autor acierta en la introducción cuando señala que la “creación del Estado Social chileno tiene una paradoja. Fue creado por los militares (entre septiembre de 1924 y enero de 1925) y desmantelado por los militares 50 años después”, aunque esta constatación ya había sido hecha por Francisco Cumplido y Hugo Frühling (1980), Gonzalo Vial (1981), Verónica Valdivia (2003) y Juan Carlos Yáñez (2008). Sin embargo, creemos que de la investigación llevada a cabo por Rodrigo Henríquez surge otra gran paradoja y quizás más importante. Este “Estado Sólido” que se articuló en torno a un imaginario de intervención y redes de apoyo transversal, que permitió avanzar en medidas redistributivas, aumento de la democracia y la constitución de una sociedad de derechos, se desmanteló a los pocos años de iniciada la dictadura militar del general Augusto Pinochet. ¿Qué explica que este “Estado Sólido” mostrara sus pies de barro? O la transformación cultural operada por el neoliberalismo desde mediados de los años 1970 (vía represión y muerte, pero también a través de la seducción de un nuevo orden, parafraseando a la profesora Ana María Stiven), fue de tal magnitud que borró todos los cimientos simbólicos y valóricos que nos ligaban al Estado de Bienestar o los avances sociales de este Estado no fueron estructurales y no permearon las capas más profundas de la sociedad, beneficiando a su entramado superficial y excluyendo al grueso de la población. Si esto último es

efectivo, la mayoría de los chilenos no se enteraron de lo que estaba en juego con el quiebre de la democracia y la instauración de un modelo neoliberal de convivencia. El hecho de que un grupo no menor de cotizantes hayan optado por desidia, ignorancia o fe ciega en los postulados del nuevo régimen previsional chileno de tipo privado (AFPs), mientras que los militares permanecieron fieles al antiguo sistema de reparto estatal, y que hasta el día de hoy no haya voluntad política por modificar sustancialmente el sistema, no solo es una bofetada a la conciencia social construida en las largas luchas del siglo XX chileno, sino que puede ser la prueba de que la transformación cultural de las últimas décadas ha terminado por minar cualquier posibilidad de resistencia y cambio del modelo previsional chileno.

